5. Resolver los recursos contra las decisiones de suspensión de acuerdos de las Corporaciones Locales, adoptados por la Dirección General de Política Interior y Administración Local de la Consejería, cuando éstas se funden en los supuestos previstos en el número 1, apartados 1.º, 2.º y 4.º, del artículo 362 de la Ley de Régimen Local.

6. Disponer la suspensión de miembros electivos de las Corporaciones Locales en los supuestos de mala conducta o negligencia grave previstos en el artículo 421 de la Ley de Régimen Local.

7. Resolver los recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones del Director general de Política Interior y Administración Local en materia de incapacidades, excusas e incompatibilidades de miembros de las Corporaciones Locales.

8. Disponer la disolución de las Juntas vecinales cuando su gestión resulte gravemente dañosa.

9. Ordenar la suspensión de Entidades menores cuando disuelta la Junta vecinal, la nueva Junta constituida en régimen de tutela no consiga la rehabilitación de su hacienda en el plazo de un ejercicio económico.

10. Autorizar los expedientes de enajenación, permuta o gravamen de bienes inmuebles de propios de las Corporaciones Locales, cuando su valor exceda del veinticinco por ciento del presupuesto anual de la Corporación.

11. Autorizar la venta directa o permuta a favor de propietarios colindantes de parcelas no utilizables y sobrantes de vías públicas, cuando el valor de los bienes exceda del veinticinco por ciento del presupuesto anual de la Corporación.

12. Aprobar, previo dictamen del Consejo de Estado, las ordenanzas especiales de disfrute y aprovechamiento de montes comunales.

13. Aprobar los expedientes de desafectación de bienes comunales de las Corporaciones Locales.

14. Aprobar los expedientes de inclusión de bienes comunales en concentración parcelaria.

15. Autorizar o prestar conformidad al establecimiento de Convenios entre las Corporaciones Locales y Entidades privadas y particulares para la repoblación forestal de toda clase de montes de dichas Corporaciones, excepción hecha, en todo caso, de los montes catalogados.

16. Autorizar expedientes para la adquisición de valores mobiliarios por las Corporaciones Locales.

17. Aprobar los expedientes de municipalización de provincialización de cualquier servicio sin monopolio.

18. Autorizar el concierto de más de uno de los servicios previstos en el artículo 245 de la Ley de Régimen Local.

Para el ejercicio de las atribuciones referidas, con excepción de las consignadas en los apartados 6 y 7, emitirán informe previo las Diputaciones Provinciales competentes por razón del territorio.

Art. 5.º El Director general de Política Interior y Administración Local tiene las siguientes competencias:

A) Con carácter de propias:

1. Suspender los acuerdos de las Corporaciones Locales en los supuestos del número uno, apartados 1.º, 2.º y 4.º, del artículo 362 de la Ley de Régimen Local.

2. Resolver las cuestiones que se produzcan sobre incapacidades, excusas e incompatibilidades de los miembros de las Corporaciones Locales, en los casos previstos por el artículo 362 de la Ley de Régimen Local.

3. Conocer y, en su caso, suspender las Ordenanzas y Reglamentos municipales en los supuestos previstos por los artículos 109 y 110 de la Ley de Régimen Local.

4. Prestar conformidad a los acuerdos de las Corporaciones Locales sobre concesión de honores y distinciones.

B) Como delegadas:

1. Aprobar la distribución del término municipal en distritos y la reforma, aumento o disminución de los existentes.

2. Prestar conformidad a los expedientes de enajenación, permuta o gravamen de bienes inmuebles de propios de las Corporaciones Locales, cuando su valor no exceda del veinticinco por ciento del presupuesto anual de la Corporación.

3. Prestar conformidad a la venta directa o permuta a favor de propietarios colindantes de parcelas no utilizables y sobrantes de vía pública, cuando el valor no exceda del veinticinco por ciento del presupuesto anual de la Corporación.

Art. 6.º El Secretario general Técnico tendrá las siguientes funciones:

1. El estudio, documentación y asesoramiento permanente de la Consejería de Interior.

2. La elaboración de proyectos de disposiciones y resoluciones.

3. El desarrollo y ejecución de las facultades que se deleguen, en especial, el despacho y firma de los asuntos de trámite.

4. La certificación de la documentación y expedientes obrantes en la Consejería.

Art. 7.º Las Diputaciones Provinciales, en las competencias transferidas a la Consejería de Interior emitirán el informe señalado en el artículo 2.º del Real Decreto 698/1979, de 13 de febrero.

Este informe, en materia de suspensión de acuerdos lo evacuarán en el plazo de dos días hábiles siguientes al día en que se reciba y de no hacerlo se considerará que es favorable a la no suspensión.

TITULO II

Funcionamiento

Art. 8.º En el ámbito de su competencia y para la formación de su voluntad, el Consejo Permanente de la Junta de Andalucía, la Consejería de Interior y demás Organismos dependientes quedan sometidos a las normas establecidas en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, Ley de Procedimiento Administrativo y Reglamento de Régimen Interior de la Junta.

TITULO III

Régimen jurídico, recursos y responsabilidad

Art. 9.º Se está a lo preceptuado en los artículos 44, 45 y 46 del Real Decreto 698/1979, de 13 de febrero.

Art. 10. Cuando las resoluciones administrativas se adopten por delegación se hará constar expresamente esta circunstancia.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza al Consejero de Interior para dictar las disposiciones necesarias para la efectividad del presente Decreto.

Segunda. El presente Decreto se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la Junta de Andalucía.

Tercera. El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Sevilla, 21 de abril de 1980.—El Presidente de la Junta de Andalucía, Rafael Escudero Rodríguez.—El Consejero de Interior, Antonio Ojeda Escobar.

16826

DECRETO de 16 de junio de 1980 por el que se distribuyen entre las Consejerías del Consejo Regional de Asturias competencias que se transfieren por Real Decreto 2874/1979, de 17 de diciembre, de la Administración Central del Estado al Consejo Regional de Asturias.

El Real Decreto-ley 29/1978, de 27 de septiembre, por el que se aprobó el régimen preautonómico para Asturias, prevé las transferencias de funciones y servicios de la Administración del Estado al Consejo Regional de Asturias.

El Real Decreto 2405/1978, de 27 de septiembre, que desarrolla el Real Decreto-ley citado, creó una Comisión Mixta de representantes de la Administración del Estado y del Consejo Regional de Asturias con la finalidad de proponer al Estado los acuerdos de transferencias.

El Real Decreto 2874/1979, de 17 de diciembre, transfiere competencias de la Administración del Estado al Consejo Regional de Asturias en materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, urbanismo, agricultura, ferias interiores, turismo, transportes, Administración Local, cultura y sanidad.

En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta en relación con la disposición final segunda del Real Decreto 2874/1979, de 17 de diciembre citado, y previa deliberación del Consejo Pleno del Consejo Regional de Asturias en sesión celebrada el día 16 de junio de 1980, dispongo:

Artículo único.—Se distribuyen las competencias que en el citado Real Decreto 2874/1979, de 17 de diciembre, se transfieren al Consejo Regional de Asturias para su entrada en ejercicio el primero de julio a las siguientes Consejerías:

— A la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente, todas las competencias incluidas en la sección primera, referentes a actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, comprendidas en los artículos 1 y 2 del Real Decreto.

— A la Consejería de Comercio, Pesca y Turismo, todas las competencias incluidas en la sección cuarta, referentes a ferias interiores, comprendidas en los artículos 17 a 20, ambos inclusive, del Real Decreto.

— A la Consejería de Sanidad, Asistencia y Seguridad Social, todas las competencias incluidas en la sección novena, referentes a sanidad, comprendidas en los artículos 54 a 57, ambos inclusive, del Real Decreto.

Dado en Oviedo a 16 de junio de 1980.—El Presidente del Consejo Regional de Asturias Rafael Fernández Álvarez.—El Consejero Secretario, Francisco Prendes Quirós.